



La consulta plantea si resulta conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 11/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, la comunicación de datos personales de los asociados de la consultante requeridos por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Departamento de Investigación.

I

Como punto de partida es preciso señalar que la transmisión planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Así mismo hay que tener en cuenta que sólo los datos de carácter personal definidos en el artículo 3 a) como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” quedarían sujetos a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 quedando fuera del ámbito de la protección los datos los que, en el escrito que adjunta a la consulta, se refieren a la Asociación consultante como persona jurídica.

Tal y como indica el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no sería preciso contar con el consentimiento del afectado en caso de que una norma con rango de Ley habilite la cesión prevista, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la Ley.

II

La consulta refiere una petición de documentación a la Asociación consultante por parte de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía con amparo en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de La Competencia de Andalucía.

En materia de defensa de la competencia, y en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía atribuye en su artículo 3 a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía las siguientes competencias y funciones, entre otras, “La Agencia, según lo establecido en la

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, o normativa estatal que la sustituya, desarrollará las siguientes competencias y funciones:

a. Realizar, de oficio o a instancia de parte, la instrucción, investigación y resolución de procedimientos en materia de defensa de la competencia en el territorio de Andalucía, en aplicación de la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia. Así mismo podrá imponer las multas coercitivas y sancionadoras previstas en la citada normativa y, en su caso, declarar la prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de las sanciones que correspondan.”

En su artículo 5.1 señala que “Los procedimientos que se tramiten por los órganos de la Agencia en materia de defensa de la competencia se regirán por lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia y, supletoriamente, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la demás normativa de aplicación.”

En su artículo 18.1 dice que “El Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía es el órgano que ejerce las funciones de instrucción, investigación y vigilancia a las que se refiere la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, respecto a los procedimientos que son competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

Conforme a su Disposición Adicional Primera, en lo no regulado en esta Ley se aplicará supletoriamente la normativa estatal. Y en su Disposición Adicional Segunda referida a la colaboración señala que “Toda persona física o jurídica tiene el deber de colaborar con el Consejo de Defensa de la Competencia y el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia.”

III

Las cesiones de datos a la Comisión y, en particular, a sus órganos de inspección trae causa de lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, según el cual “Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente”.

Además, conforme al artículo 40.1, “el personal de la Comisión Nacional de la Competencia debidamente autorizado por el Director de Investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa para la debida aplicación de esta Ley”, añadiendo el artículo 40.5 que “el personal de la Comisión Nacional de la Competencia debidamente autorizado por el Director de Investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa para la debida aplicación de esta Ley”. En este sentido añade el artículo 40. 2 del Reglamento de la Ley 15/2007, Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, entre las facultades de inspección del personal habilitado las de b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial y f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre los hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas. Añadiendo su número 5 que “Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley.”

La habilitación legal otorgada por los artículos 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en relación con los artículos 3, 5 y 18 y Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para la comunicación de los datos referidos en la consulta debe, a su vez, respetar lo dispuesto por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, que consagra que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Asimismo, dicha habilitación legal deberá cumplir el principio consagrado por el artículo 4.2 de la Ley Orgánica, según el cual “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Pues bien, teniendo en cuenta la vinculación de la obtención de información a las potestades de inspección atribuidas al Departamento de Investigación, cabe concluir que el tratamiento habilitado por dichos preceptos resulta congruente con las potestades atribuidas a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y que los datos única y exclusivamente serán

tratados para las finalidades de inspección atribuidas a la misma, por lo que las cesiones derivadas de la aplicación del precepto resultarían amparadas por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica, siendo el tratamiento lícito, conforme al artículo 6.1 de dicha Ley.”

En consecuencia, existiendo las mencionadas habilitaciones legales, la comunicación de datos derivada del ejercicio de potestades de inspección



encuentra amparo en lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 39.1 de la Ley 15/2007.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,